



Superservicios

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



SDNP

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010023535 DEL 04/07/2014

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y
en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A. para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de Socotá, del departamento de Boyacá, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010008965, del 31 de marzo de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de Socotá, departamento de Boyacá, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - código postal: 110221

NIT: 800.250.984.6

PBX (1) 691 3005 - Fax (1) 691 3142

Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá

Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05

www.superservicios.gov.co - ssdpd@superservicios.gov.co



a). Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010008965 del 31 de marzo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010008965 del 31 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de Socotá, del departamento de Boyacá mediante el oficio No. SSPD 20144010177151 del 31 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 4 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El día 11 de abril de 2014, el representante legal del municipio, señor Pablo Ricardo Lizarazo Navas, compareció a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20144010008965 del 31 de marzo de 2014.

Ahora bien, el señor Pablo Ricardo Lizarazo Navas, en su calidad de alcalde del municipio de Socotá, del departamento de Boyacá, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290208152 del 28 de abril de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010008965 del 28 de abril de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de Socotá, del departamento de Boyacá, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290208152 del 28 de abril de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Se lo primero indicar que jurisdiccionalmente la Corte Constitucional en sentencia C - 353 de 2006 ha establecido: "tal como lo expone la Ley 142 de 1994, el cobro del cargo fijo no es obligatorio sino una opción que tienen las comisiones de regulación al definir las fórmulas tarifarias, que resulta razonable si se tiene en cuenta que cada servicio tiene sus propias características de prestación y, por lo tanto, sus propios costos. Señala que esta forma de financiación permite que haya recursos suficientes para mejorar la calidad actual de los servicios y ampliar coberturas futuras, Recalca que no es cierto que la eliminación del cargo para familias de alto consumo como son los estratos más bajos encarecería los servicios, pues, las empresas tendrían que recuperar dichos costos vía consumo. Añade que en los sectores de acueducto y saneamiento básico, a diferencia de los otros servicios, se subsidia además del consumo, el cargo fijo. Concluye que la norma acusada es un instrumento que permite no sólo el equilibrio financiero a las empresas de servicios públicos sino

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

que constituye un mecanismo de protección de los ingresos de los usuarios de más alto consumo que son una gran mayoría en el país.

Atendiendo a lo anterior, es de señalar que las entidades territoriales del orden nacional que representan al Estado están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, son entidades del orden administrativo y están encargadas principalmente del desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas y que para el caso puntual es la correcta inversión y evaluación del gasto público social.

Ha de señalarse que al tenor de los argumentos considerados en la resolución No. SSPD - 20144010008965 del 31 de marzo de 2014, se avista textualmente que se hace referencia en todo contexto al cumplimiento del Municipio en los términos perentorios, frente al reporte y seguimiento de la administración de los recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico correspondientes a la vigencia 2012.

No obstante a lo anterior, el incumplimiento que se predica en el Acto Recurrido, obedece a errores eminentemente aritméticos y/o de digitación en que incurrió el Despacho al reportar el Acuerdo Municipal No. 029 del 29 de Noviembre de 2009 y no la resolución aplicada en el asunto de maras, esto es la No. 20120109-001 del 09 de enero de 2012 la cual se anexa para los efectos legales pertinentes.

Al tenor de lo antes expuesto, ha señalado la Honorable Corte Constitucional en auto 228 de 2011, expediente T - 3002873: "Según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, cuando en la transcripción del texto de una providencia se producen errores es aplicable el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil a fin de proceder a la corrección en cualquier tiempo. Sobre este tema, en Auto 231 de 2001, señaló:

(...) El inciso 3° del artículo 310 del C. de P.C. Permite que se corrijan los errores que se cometen por la omisión o cambio de palabras o alteraciones de estas, de manera idéntica a la que se autoriza para corregir los errores aritméticos, pero respecto de otra clase de fallas..."

De acuerdo con las disposiciones anteriores, es de señalar que esta administración vela por el fiel cumplimiento de las disposiciones normativas que el legislador ha dispuesto para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. No obstante, debe aclararse que este Despacho no ha incurrido en factores de omisión y el error en que se incurrió al citar un Acto Administrativo anterior al aplicado (20120109-001), obedeció a criterios de error eminentemente involuntarios, toda vez que como se podrá valorar, se adoptaron las tarifas de servicio público domiciliario acorde con lo dispuesto en el Acto administrativo de la anualidad 2009 anexo a este impreso.

Por lo anterior, es pertinente señalar que la Corte en sentencia T 531 de 2010 ha anotado como precedente jurisprudencial al tenor de los artículo 29 y 228 de la Constitución Nacional la prevalencia del derecho sustancial sobre el forma, precisando: "un efecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia", causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia inflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por "un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas". Tratándose de las pruebas, la Corporación ha indicado que, si bien los jueces gozan de libertad para valorarlas dentro del marco de la sana crítica, "no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial" y "que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes". La Corte ha enfatizado que "el defecto procedimental por exceso ritual manifestó se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial" y se configura "en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas sustanciales relacionadas con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales..."

Es de indicar que si bien es cierto, se incurrió en error respecto del reporte del Acto Administrativo VIGENCIA 2012, no puede desconocerse que este ente Municipal ha cumplido a cabalidad como se denota (incluso) en los considerandos de la resolución recurrida, aunado a que se aplicó en su integridad lo dispuesto en proveído No. 20120109-001 de 09 de enero de 2012 y no el Acuerdo

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Municipal No. 029 del 29 de Noviembre de 2009 como se podrá evidenciar en el adjunto, situación que en el caso en particular y atendiendo la norma invocada del Ordenamiento Procesal Civil obedece a criterios de errores involuntarios sujetos a corrección.

La imposición de la medida de Descertificación en relación con la Administración de recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico SGP-PSB – VIGENCIA 2012, ha de interpretarse como una situación a ardua en los compromisos adquiridos por el Municipio, toda vez que al tenor de lo tipificado en ella artículo 287 de la Carta Política las entidades territoriales gozan de autonomía en la gestión de sus asuntos e intereses, para lo cual tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les corresponden, administrar sus recursos establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Derechos esenciales de las entidades territoriales que debe respetar el legislador pues constituyen el contenido mínimo del principio de autonomía territorial.

El Gasto Público Social que se vulnera con la decisión adoptada no puede desconocer lo que en principio es un agravio para los habitantes de la Jurisdicción Municipal como quiera que estos recursos son destinados a satisfacer el bienestar social y que debido a flagelos de pobreza extrema, desplazamientos forzados y violencia han aumentado de manera acrecida y que buscando desmenujar tales condiciones se busca hacer una correcta inversión de los recursos provenientes del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico.

La Sentencia C- 151 d 1995 de la Corte Constitucional define la inversión social como aquella que "se compone de aquellos recursos destinados a mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales discriminados que por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios de desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas".

El artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto define el GPS como "aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población"

Por lo expuesto y atendiendo los presupuestos invocados, es de solicitar se REVOQUE la decisión adoptada en la resolución SSPD – 20144010008965 del 31 de marzo de 2014 mediante la cual se Descertifica el Municipio de Socotá – Boyacá en relación con la Administración de recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico SGP – APSB – VIGENCIAS 2012; y como consecuencia se profiera la Certificación al tenor del parágrafo del artículo 4 de la ley 1176 de 2007."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290208152, del 28 de abril de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Resolución No. 20120109 -001, del 9 de enero de 2012, por medio de la cual se establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

3.3.2. Tres pantallazos del SUI, del plan de carga de la información del año 2012.

3.3.3 Una factura del mes de enero de 2012, emitida por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Socotá.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

inicia sus argumentos el impugnante, señalando que el incumplimiento al que se refiere la Resolución recurrida, se debió "a errores eminentemente aritméticos y/o de digitación" toda vez que reportó el Acuerdo Municipal No. 029 del 29 de noviembre de 2009 y no la Resolución No. 20120109-001 del 09 de enero de 2012, Acto Administrativo que rigió en la vigencia 2012, la cual anexa como prueba con el recurso.

De igual manera, invoca la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y pone de presente que la decisión de descertificación causa un agravio para los habitantes de la Jurisdicción Municipal, por cuanto "los recursos son destinados a satisfacer el bienestar social básico y que debido a flagelos de pobreza extrema, desplazamientos forzados y violencia han aumentado de manera acrecida y que buscando desmenguar tales condiciones se busca hacer una correcta inversión de los recursos provenientes del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico.(...)".

Por lo expuesto, el señor alcalde de Socotá, solicita se revoque la Resolución SSPD – 20144010008965 del 31 de marzo de 2014 y en consecuencia se profiera la Certificación del municipio de Socotá.

Al respecto, este despacho advierte que de lo revisado en el SUI, se encontró que el ente territorial el 30 de agosto de 2013, cargó en el formato acto de aprobación de tarifas del SUI, el Acuerdo Municipal 029 del 29 de noviembre de 2009, mediante la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin embargo el Acto Administrativo señalado expresa que solo aplica para la vigencia 2010 y además fue expedido por el Concejo Municipal, razones que fundamentaron el incumplimiento del requisito en cuestión y por ende la descertificación del municipio, toda vez que, de un lado, el mismo no rigió para la vigencia evaluada y de otro, debido a que el Concejo Municipal no se constituye como entidad tarifaria local.

A continuación se adjuntan imágenes del reporte y Acuerdo mencionado.

Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI		aseo						
República de Colombia		consulta de información						
asociarComercioInformación PDF-TIFF (Para formato HTML) N° Registros en pantalla: todos Generar reporte en formato: XLS HTML PDF CSV								
Departamento: BOYACÁ Municipio: SOCOTÁ Empresa: UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ Formato: Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff- (Formato 7 de la Resol. SSPD 15065 de 2009)								
Información PDF-TIFF Departamento: Municipio: Empresa: Formato:								
ID_EMPRESA	EMPRESA	FORMATO	ARCHIVO	ESTADO DEL CARGUE	PERIODICIDAD	AÑO DE REPORTE	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACION
71797	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff- (Formato 7 de la Resol. SSPD 15065 de 2009)	ACUERDO 029-2009, 201009 y TABLAS2010.adf	NO	Anual	2012	1	2013-08-30

República de Colombia		Departamento de Boyacá	
Concejo Municipal		Socotá	
RECIBIDO 0 1 01			
ACUERDO No. 029 Noviembre 29 de 2009			
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ"			
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOCOTÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, ESPECIALMENTE LAS OTORGADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ART. 313 Y LA LEY 136 DE 1994, LEY 909 DE 2004 Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 142 DE 1994, Y,			
CONSIDERANDO:			

Ahora bien, el argumento manifestado por el recurrente, referente al error aritmético y/o de digitación que lo condujo a cargar un documento equivocado, no es comprensible, dado que lo que se evalúa dentro del proceso de certificación es el Acto Administrativo que reporta el municipio, de ahí que se advirtieran las falencias del mismo, las cuales no obedecieron a errores de cálculo o transcripción, así las cosas, lo que puede sugerirse es un error a la hora de reportar el documento correcto, más no es posible contextualizar el error aritmético y/o de digitación invocado por el señor alcalde en el presente asunto.

Respecto de las citas jurisprudenciales que efectuó el impugnante, tendientes a soportar su argumento de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, es de advertir que esta superintendencia desempeña todas sus actuaciones administrativas ajustada no solo a las normas que rigen su ejercicio, sino también a los principios constitucionales y legales. Sin embargo, siguiendo los lineamientos que gobiernan el presente asunto, no se puede tener como válidos aquellos documentos que la Ley no contempla para acreditar uno u otro criterio, pero si puede en virtud de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, analizar casos específicos, cuyos fundamentos fácticos especiales, pueden determinar el cumplimiento de un criterio en particular.

En este orden de ideas, es necesario que el recurrente tenga en cuenta, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

Lo anterior ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, en el siguiente sentido¹: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

El señor alcalde de Socotá, esgrime también que la decisión de descertificación causa un agravio para los habitantes de la Jurisdicción Municipal, a lo cual esta entidad manifiesta, que la descertificación es la consecuencia que el legislador prevé respecto de aquellos municipios y distritos que no den cumplimiento a los requisitos que la Ley les impone, por tanto de la misma no puede predicarse un agravio.

Hechas las anteriores aclaraciones, y teniendo en cuenta que el municipio efectuó un reporte en el SUI relacionado con la aprobación de las tarifas de los servicios que presta directamente el municipio, dentro del término establecido por el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, esto es el 30 de agosto de 2013, y una vez revisada la Resolución No. 20120109-001 del 09 de enero de 2012, por medio de la cual se establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, allegada como prueba con el recurso, se considera que la misma se ajusta a lo establecido por la norma, habida cuenta de que fue expedida por la entidad tarifaria local, antes de la fecha máxima de cargue, por tanto, en virtud del principio de eficacia consagrado en el numeral 11° del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, el criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA se tiene por cumplido.

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

En conclusión, se evidencia que el ente territorial acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Pablo Ricardo Lizarazo Navas, como alcalde municipal de Socotá, prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se revoca.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR a Resolución No. SSPD 20144010008965, del 31 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR al municipio de SOCOTÁ, departamento de BOYACÁ, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de Socotá, departamento de Boyacá, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información

Visó Bueno: Martha Lucia Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Angela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094011577460303A